

CAPÍTULO VII

A MODO DE CONCLUSIÓN

La atención y la regulación institucional de los menores de familias empobrecidas — entre los cuales indudablemente se encuentran los menores que viven o trabajan en las calles— en el municipio de Puebla no es un fenómeno reciente; antes bien, es una obligación bien establecida para el ayuntamiento. El Hospicio de Pobres de la ciudad de Puebla, fundado en 1832, ya se encargaba de estos menores, educándolos en el respeto y la obediencia a los mayores, la autoridad y las instituciones, en donde la disciplina escolar de los cuerpos se hacía en función del capitalismo y su exaltación hacia el trabajo, lo que contribuía a la formación de mano de obra. De esta manera, “en la niñez amparada por la asistencia pública, el estado tuvo la oportunidad de ensayar la formación del ciudadano que los tiempos de la modernidad exigían” (Herrera Feria 2005:227-229). A partir de los discursos y las prácticas de los programas del DIF Municipal y de la Fundación JUCONI, constatamos la vigencia de las acciones institucionales con respecto a estos menores, si bien sus vínculos con el capital han sido oscurecidos por la percepción de que están desintegrados de la sociedad.

En los capítulos segundo y tercero de esta investigación se esbozaron algunos de los elementos que ayudan a entender el contexto en el que se mueven los menores que viven o trabajan en las calles y las organizaciones que los atienden, al tiempo que sus acciones y discursos moldean dicho campo. De esta manera, en la introducción propusimos entender este contexto —conformado por sus relaciones económicas, espaciales e institucionales— como un campo de fuerza en donde la hegemonía construye un marco material y significativo común para vivir en los órdenes sociales

caracterizados por la dominación, hablar de ellos y actuar sobre los mismos (Roseberry 1994:361). Coincidíamos también, con que ese marco es, en parte, discursivo: un lenguaje común o una manera de hablar sobre las relaciones sociales que definen ciertos términos alrededor de los cuales —y en términos de los cuales— pueden ocurrir la impugnación y la lucha (Roseberry 1994:361).

En este último capítulo mencionamos un par de aspectos que ayudan a entender un poco mejor la parte del campo de fuerza constituido por el DIF Municipal y JUCONI. De igual manera, se reflexiona a cerca de los efectos y los “efectos secundarios” (Ferguson 1994) de los programas del DIF Municipal y de JUCONI en términos de la manera en que los programas hablan de los menores y sus familias, así como de la noción tan extendida en los mismos de que sus beneficiarios están desintegrados de la sociedad, argumentando lo contrario en términos de sus vínculos con el capital.

El programa del DIF Municipal emerge inequívocamente como un espacio fuertemente determinado por la estructura del gobierno municipal, por las acciones y motivaciones dispares y heterogéneas de quienes laboran en su interior, por una población beneficiaria móvil y permanente a la vez, así como por su orientación fundamentalmente asistencialista. Por esta razón, resultó evidente que no se podía hablar de “el programa” del DIF Municipal, pues el afán por reemplazar un equipo de trabajo por otro era una práctica común, lo que permitía la existencia de objetivos y formas de trabajar disímiles, múltiples y hasta contradictorias. El carácter diáfano de la descripción del programa responde a que el acceso a él fue completamente abierto, confirmando que, en efecto, se trata de un programa público, en donde todo estaba al descubierto: desde el continuo reemplazo del personal hasta la falta de conocimiento o interés para atender a los beneficiarios por parte de algunos trabajadores del programa. También fue así con respecto al acceso a los beneficiarios para entrevistarlos, pues existió una completa libertad para hablar con ellos.

Contrario a la versión oficial, el programa no estaba diseñado tomando en cuenta a los beneficiarios, sino que estaba orientado a mantener la imagen de que el gobierno

municipal está trabajando para combatir un fenómeno que la población percibe con gran claridad y cotidianeidad durante sus recorridos por los arroyos viales de la ciudad. Sin embargo, esto no quiere decir que las acciones de todo el personal que ha laborado y labora actualmente en el programa están dirigidas a cumplir con este propósito. A cada uno lo impulsaba una motivación distinta que puede ubicarse entre estos dos polos: a unos, el deseo de sobrevivir dentro de la administración municipal durante el mayor tiempo posible ocupando un determinado puesto de manera provisoria, y a otros, la aspiración altruista de servir al más necesitado. A pesar de esto, el común denominador de todo el personal era la inestabilidad de sus empleos, pues nunca sabían cuánto tiempo iban a permanecer en él (tres años y medio fue el mayor tiempo que una persona permaneció trabajando en el programa).

La población que recibía sus servicios era igualmente heterogénea y, en la mayor parte de los casos, su participación en el programa respondía a las necesidades del mismo (e.g. aumentar el número de beneficiados) y no a aquellas de los menores. A pesar de esto, como vimos, existía un núcleo más o menos constante de beneficiarios: los menores de edad impugnaban los fragmentados esfuerzos del personal mediante el rechazo a ser categorizados como “niños de la calle” y su rebeldía, pero resentían el control y la regulación que se ejercía sobre ellos mediante la constante amenaza de ver reducida la cantidad que recibían semanalmente como beca. Por su parte, los muchachos del grupo de pintores, habiendo participado como menores en programas anteriores, reflejaron dos posturas distintas: mientras que algunos buscaban constantemente mejorar sus oportunidades laborales y de estudio, otros se conformaban con lo que había, sin cuestionar las prácticas dominantes de sus superiores.

A diferencia del programa del DIF, al interior del subprograma de JUCONI existían directrices claras en materia de objetivos, metodología, reclutamiento del personal, selección de los beneficiarios, entre otros. Esto se debe a que JUCONI, en tanto organización que pertenece al Tercer Sector, no está sujeta a una estructura

gubernamental cambiante, lo que le otorga un importante grado de autonomía en materia de financiamiento y selección del personal que trabaja en la misma. Como resultado, el subprograma de la Fundación JUCONI posee un carácter bastante unitario y homogéneo, aunque es importante mencionar que esta imagen pudo ser condicionada por el tipo de acceso que tuvo al subprograma y a la fundación en general. Este acceso fue mucho más restringido que en el DIF, lo que se vio reflejado en la imposibilidad de entrevistar a los menores y confirmó el carácter privado de la organización, así como de sus beneficiarios.

Con respecto al personal, JUCONI permitía a sus trabajadores desempeñarse en un empleo bien remunerado en el campo social con un alto grado de permanencia en la fundación (los de mayor antigüedad llevaban 13 años en ella). Lo anterior es evidencia del éxito de la fundación en la selección y entrenamiento de cuadros para atender a menores “de y en la calle” desde el Tercer Sector. En este sentido, los encargados de contratar al personal se aseguraban de que quienes trabajaran ahí lo hicieran impulsados por un sentimiento genuinamente altruista, por lo que era común seleccionar a su personal del grupo de voluntarios de la fundación.

Como se mencionó, los beneficiarios del subprograma no fueron entrevistados, por lo que no fue posible conocer sus puntos de vista en torno al mismo y la fundación en general. La prohibición de entrevistar a los menores de JUCONI y la facilidad con lo que esto se realizó en el DIF Municipal refleja parte de la especificidad de realizar etnografías en un contexto institucional, en donde la decisión de los informantes de ser o no entrevistados está mediada por la institución que ha asumido la representación de los mismos. Esto adquiere particular relevancia cuando los informantes son menores de edad, reafirmando, en el caso de JUCONI, la noción de que la niñez debe ser una etapa protegida.

En la práctica, las relaciones de cooperación entre ambas organizaciones no eran muy significativas, pues se reducían a canalizaciones esporádicas de menores (siempre del DIF Municipal hacia JUCONI) o a encuentros en las juntas del programa “De la calle a

la vida". Esto se atribuye al constante cambio en el personal del DIF Municipal así como a ciertos desencuentros entre algunos miembros del programa de esta institución durante la administración panista (2002-2005) y aquellos de JUCONI a nivel del trabajo en calle.

En un nivel un poco más abstracto, Martínez Novo (2006) señala que el programa comunitario orientado a mujeres indígenas migrantes que estudió en Baja California, realizaba un trabajo importante para el estado, ayudando a regular y controlar a una población movible y marginal. De esta manera, la autora concuerda con Ferguson, quien apunta que los programas desarrollistas a menudo fracasan en sus propios términos, pero son exitosos en expandir el alcance del estado hacia regiones y poblaciones marginales (Martínez Novo 2006:143). En nuestro caso, si bien JUCONI surge como un facilitador de funciones gubernamentales (al asumir la tutela legal de los menores y conferirles elementos que acreditan su ciudadanía como el acta de nacimiento), no necesariamente extiende el alcance del estado hacia poblaciones marginales, pues atiende a la misma población de menores que el DIF a nivel estatal y municipal.

En relación a esto, en nuestro caso no vemos un debilitamiento del estado en el contexto de la globalización, sino que el DIF, en tanto dependencia gubernamental y junto con JUCONI, sigue siendo una instancia creativa, pues, como menciona Martínez Novo (2006:94-95), las instituciones del estado mexicano siguen siendo capaces de moldear identidades que se adaptan bien a los noveles contextos económicos y políticos globales. Por esta razón, Bonamusa y Villar proponen que el estado y el Tercer Sector se sitúan en una relación de interdependencia que enfatiza la dualidad de las fuentes de poder (Bonamusa y Villar 1998:15). Este poder, como ya mencionamos, es aquel que se utiliza para sancionar ciertas formas de pensar y actuar con respecto a los menores en situación de calle. En este sentido, concordamos con Harvey, quien señala que, además del poder sobre cuestiones materiales, el poder dentro de los ámbitos de la representación también es importante (Harvey 1989:233), como veremos en seguida.

Efectos de los programas del DIF Municipal y de la Fundación JUCONI

Uno de los efectos de los programas del DIF y JUCONI es que se constituyen como productores de formas hegemónicas de pensar y actuar con respecto a los menores que trabajan o viven en las calles y sus familias. De igual manera que en la dependencia gubernamental que estudió Martínez Novo (2006) (el Departamento de Culturas Populares), el DIF ayuda a la construcción y difusión de formas identitarias aprobadas por el estado por medio de la educación y las campañas de sensibilización. Además, según Martínez Novo, se distribuyen recursos económicos para gratificar a aquellos que asumen las formas identitarias promovidas por el gobierno (Martínez Novo 2006:90), como en el caso de quienes nunca habían vivido o trabajado en la calle pero dijeron hacerlo para ingresar al programa y recibir el pago por su labor como “despintagraffiti”. En el caso de JUCONI, las formas identitarias que promueve no necesariamente son aquellas que han sido aprobadas por el estado, pero algunas sí se derivan de ellas, como las formas sancionadas por el marco legal internacional de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

A pesar de las diferencias entre los programas de las organizaciones, el personal de ambas compartía ciertas concepciones en torno a los menores que viven o trabajan en las calles. Con respecto a la distinción entre un “niño de la calle” y un “niño en la calle”, en ambas organizaciones se hablaba de la diferencia en términos de los vínculos que los menores sostenían con sus familias y el dinero que aportaban a ellas. Sin embargo, si bien esto se sostenía bien a nivel discursivo, a nivel de la práctica, en el DIF Municipal seguían confundiendo uno y otro término, como lo evidencia la falta de coherencia entre el nombre del programa y la población que legalmente podían atender. Por otra parte, no existía un acuerdo en torno al número de días que un menor tenía que pasar en la calle para ser considerado “de la calle”: mientras que en el DIF, durante la administración panista, se consideraba que un “niño de la calle” debía estar 30 días en ella para ser considerado como tal, en JUCONI el criterio podía ser tan corto como un

par de días para ingresarlo al subprograma “niño de la calle”.

Hablando de las explicaciones en torno al porqué de la existencia esta población de menores que vivían o trabajaban en las calles, en ambas organizaciones se coincidió en que este era un problema multifactorial. Por esta razón, si bien se reconocía el papel que jugaban las variables estructurales como la pobreza en la producción de estos menores, estas no siempre eran consideradas como las más importantes ya que se mencionaban junto con otras variables como la “cultura” o la reproducción biológica desenfrenada de las clases bajas. En este sentido, si bien se reconocía que los menores trabajaban en la calle para contribuir con la economía familiar, permanecía la idea de que muchos trabajaban a partir de la explotación o el engaño por parte de sus propias familias. Siguiendo esta misma línea, gran parte de quienes laboraban en una u otra organización reconocieron la dificultad de lidiar con las cuestiones estructurales que inciden en los menores con los que trabajan. Por esta razón, estos discursos tienen cabida en la “construcción política de la desesperanza” (Weiss 1997:16) según la cual, como se vio en el capítulo cinco, las consecuencias sociales de la globalización son percibidas como inevitables o irreversibles.

Tanto en el DIF como en JUCONI se culpaba a “la sociedad” de la existencia de estos menores, aunque en el DIF era más clara esta tendencia (si bien desde dos puntos de vista opuestos), pues se hablaba de la culpabilidad de esta tanto por ayudar a estos menores (dándoles dinero en las calles) como por no hacerlo (no preocupándose por ellos). Por otra parte, a pesar de que había pocas referencias en torno al papel que jugaba la política en la producción de menores en situación de calle, al menos en dos casos se mencionó que el problema tenía que ver con la ineficacia de las políticas públicas.

Un número sustancial de entrevistados mencionó la violencia como uno de los factores que intervienen en la existencia de menores que trabajan o viven en la calle, ya sea en relación con la explotación o como violencia intrafamiliar. En la mayoría de los casos se admitió que esta violencia estaba estrechamente vinculada con los problemas

económicos y la miseria en que vivían estas familias, aunque no fue una cuestión unánime. Por esta razón, es importante mencionar el argumento de Bourgois (2003) en torno a que la violencia intrafamiliar tiene que entenderse dentro de un contexto histórico, político y económico pues, a nivel de la psique individual, puede parecer simplemente el resultado de patrones de violencia doméstica transmitidos intergeneracionalmente. Esta manera de explicar la patología y el fracaso, prosigue el autor, es tan individualista y psicológicamente reduccionista que no ofrece caminos realistas para romper este tipo de “ciclos” familiares (Bourgois 2003:302). Muchos de los traficantes de droga a los que entrevistó en Harlem, Nueva York, aspiraban a vivir en una familia nuclear ideal y, de hecho, muchos habían vivido en una durante las etapas donde tenían un empleo estable y legal. Es por esto que el autor afirma que existe una compleja correlación entre el desempleo, la patología personal, la inestabilidad familiar y la vulnerabilidad estructural en el mercado laboral (Bourgois 2003:303).

Las respuestas en torno a si podía prevenirse que hubiera menores trabajando o viviendo en las calles fueron de forma unánime afirmativas, aunque en el DIF Municipal admitieron que no contaban con muchas medidas preventivas. Las medidas que sí mencionaron giraban en torno a pláticas sobre la planificación familiar, los “valores” y la prevención al maltrato, así como campañas de sensibilización para el público en general. Solamente una persona sugirió modificar el marco legal con respecto a la defensa de los niños y otra planteó crear empleos, pero de manera secundaria a implementar programas preventivos desde el DIF. Por su parte, en JUCONI las medidas preventivas estaban incorporadas en sus tres subprogramas, particularmente aquel dirigido al niño trabajador de mercado, mediante el Centro de Atención JUCONI, así como la difusión de su metodología por medio del Centro de Apoyo Técnico (CAT).

Además de las concepciones señaladas, ambas organizaciones compartían la percepción fundamental de que los menores a quienes brindaban sus servicios, así como sus familias, no estaban integrados a la sociedad, por lo que la meta principal de

dichos programas era integrarlos —o reintegrarlos— a la misma. En JUCONI esto era más claro, pues estaba estipulado en su misión y sus objetivos como fundación; por el contrario, en el DIF Municipal esto se dejó ver en los discursos de una parte del personal, así como en la campaña de sensibilización y la obra de teatro.

Tanto en el programa del DIF como en el de JUCONI “la” sociedad a la que aspiraban a integrar a sus beneficiarios estaba configurada por los valores clasemedios y católicos de la familia y la niñez, en donde los empleos bien remunerados de los adultos permiten prescindir de la mano de obra de los menores para la reproducción de la unidad doméstica. En los discursos del DIF, esto se vio a través de la afirmación de que los menores carecían de “valores”, mientras que en JUCONI fue mediante el concepto de “*mainstream society*” (sociedad promedio o corriente principal de la sociedad). En ambos casos, no se hacía referencia explícita a las condiciones materiales necesarias para configurar este espacio, que, a nuestro parecer, más que “sociedad”, tendría que conceptualizarse como la clase media.

Para el director operativo de JUCONI, la intervención en la vida de estos menores para integrarlos a la clase media se justificaba a partir de la idea de que, si bien JUCONI no estaba solucionando el problema de raíz, se trataba de vidas que era preciso salvar. Por otra parte, el trabajo con estos menores también estaba orientado a prevenir que estos se convirtieran en delincuentes o desempleados, lo que supondría una carga para la sociedad. Con respecto al programa del DIF, las razones detrás de los esfuerzos dirigidos a estos menores no eran tan claras, pero podría decirse que tenían que ver con la idea de que los menores no debían estar en un ambiente de calle porque era perjudicial para ellos por el simple hecho de ser niños.

En este sentido, podemos afirmar que los discursos y las prácticas de ambas organizaciones son paternalistas, en tanto que, como afirma Van der Veer (1986), interfieren con la autonomía de otro “por su propio bien”. Este autor sugiere que el paternalismo solamente se justifica en casos donde existe incompetencia temporal o permanente de quien la recibe y por eso es problemático cuando se aplica a personas

que son capaces de tomar sus propias decisiones. El paternalismo es particularmente problemático cuando se trata de niños pobres, pues su cualidad de “niños” automáticamente exige, al menos a partir de las nociones clasemedieras de la niñez, que sean protegidos por los adultos, pues se estima que en esa etapa de la vida son hasta cierto punto incompetentes (si bien temporalmente). Sin embargo, es peligroso obviar su condición de pobres a favor de aquella de la edad, pues es precisamente la primera que debe problematizarse, como veremos más adelante. Otro matiz del paternalismo es señalado por Mary Jackman (citada en Martínez Novo 2006-159-160), quien lo define como “discriminación sin la expresión de hostilidad”, siempre y cuando el subordinado se quede en su lugar, lo cual es una de las cosas que los menores aprenden al interior de los programas del DIF y JUCONI. Regresaremos a esto último líneas más abajo.

Las estrategias específicas que ambas organizaciones se plantean para integrar a los menores giran fundamentalmente en torno a la educación. En el caso del DIF Municipal, esto se apreció en el capítulo cinco, mediante la creación de la escuela abierta y el estudio que llevó a cabo la coordinadora educativa durante parte de la administración panista 2002-2005. En JUCONI, antes de empezar a realizar un trabajo educativo, se ponía atención en el aspecto psicológico, para sanear los “traumas” derivados de la vida y el trabajo en calle. Posteriormente, cuando los menores alcanzaban la edad legal para trabajar, se les capacitaba en un taller productivo a modo de que aprendieran la “cultura laboral” necesaria para encontrar un empleo una vez que terminaran sus estudios. Como veremos en seguida, estos empleos eran trabajos diseñados para un proletariado urbano y desechable.

El problema principal con los discursos y prácticas que giran en torno a la integración-reintegración de los menores a “la sociedad” es que obscurecen los vínculos reales que informan la participación de estos menores y sus familias en la misma, la cual está determinada por el capital y las propias organizaciones. En este sentido, en su libro *The Myth of Marginality: Urban Poverty and Politics in Rio de Janeiro* (2003), Perlman

señala que los mitos en torno a la marginalidad en las favelas de Río de Janeiro, a pesar de ser aceptados por la sociedad, eran empíricamente falsos, analíticamente engañosos e insidiosos en sus implicaciones con respecto a las políticas públicas. En efecto, la autora argumenta que los favelados no están marginados, no están separados del sistema ni tampoco se encuentran en los márgenes del mismo, sino que están incluidos en el proceso de la acumulación de capital por medio de una cadena de explotación ligando su labor al proceso productivo y disminuyendo su costo de reproducción (Perlman 2003:18-19).

Como hemos mencionado en los capítulos anteriores, las familias de estos menores se caracterizan por los bajos salarios, la pérdida del poder adquisitivo y la erosión de la importancia económica de las actividades del sector primario en aquellos casos en donde la familia está involucrada en ellas. En todos los casos examinados, se trata de hijos de hogares proletarios con empleos redundantes y obsoletos, los cuales forman parte del ejército industrial de reserva, del cual hablamos en el capítulo uno. La manera específica en que estos menores se vinculan con este ejército puede entenderse a partir del concepto de “subsídios al capital” propuesto por Sider (2003).

Sider propone que la raza, el género, la ciudadanía, el saber leer y escribir, y el lugar de origen son formas que moldean qué tan intensa y destructivamente se pueden extraer diferentes tipos de plusvalor de lo que se ve como diferentes tipos de personas. Estas diferencias, que son simultáneamente desigualdades, son políticamente construidas y continuamente moldeadas por procesos políticos y económicos. Con esto, Sider quiere decir que el capital, por sí mismo, no puede producir todas las desigualdades de las que se sirve y de las que depende. Estas desigualdades deben verse como “regalos” o “subsídios” que se le otorgan al capital (Sider 2003:12). Esto recuerda lo que Roseberry (1997) mencionaba en torno a la importancia de poner atención en variables como la edad, la etnia y el género en tanto que actúan como “filtro” en la incorporación y el desempeño de los niños dentro del ejército industrial, exacerbando o atenuando sus efectos (Roseberry 1997:38).

En este sentido, argumentamos que la edad de los menores es configurada de tal forma que su vulnerabilidad tiende a ser atribuida a su condición de niños y no a su condición en tanto reclutas al ejército industrial de reserva (Marx 1999:545 [1867]). Esto es evidente en el caso de los jóvenes y adultos que trabajan en las calles pues ya no causan compasión ni existen programas para ellos. Este tipo de ejército, como vimos en el capítulo dos, es ordenado y explotado por empresas como BONICE y TELMEX, quienes se han apropiado del trabajo en calle para abaratar los costos de comercialización de sus productos, pues sus empleados no están sujetos a las condiciones de un empleo formal. Resulta irónico que algunas de estas empresas realizan donaciones a las ONGs que trabajan con menores en situación de calle, como es el caso de Carlos Slim, —al parecer ahora el hombre más rico del mundo (Walsh 2007)— quien donó 40 mil millones de pesos a través de las fundaciones Carso y TELMEX, quienes tienen programas para los más pobres, especialmente niños y jóvenes (Cardoso 2006).

Mientras la mano del capital —personificado en Slim— se toca el corazón, la otra exprime, inclemente, todo el plusvalor posible en términos de superexplotación, la cual se consigue mediante la intensificación del trabajo, la prolongación de la jornada laboral y la reducción del consumo del trabajador (de modo que dificulta la reposición de su fuerza de trabajo). Estos mecanismos (que pueden existir de forma combinada) aseguran que el trabajo se remunere por debajo de su valor (Marini 1973:38-42), lo que posibilita que la fortuna de un empresario como Slim crezca de tal manera que, actualmente, equivale al ocho por ciento del PIB de México (Walsh 2007). Por esta razón, el dinero caritativo no es así altruista; es una inversión directa en el entrenamiento y regulación de la misma población que posteriormente será explotada por la misma empresa. Más aún, siguiendo a Martínez Novo, los empresarios que emplean a miembros de grupos vulnerables, generalmente son percibidos como caritativos y benefactores (Martínez Novo 2006:139), no solo porque, como en este caso, realizan donaciones a los niños y jóvenes que posteriormente se encontrarán en sus redes de superexplotación, sino porque también se le agradece que les dé trabajo a los pobres,

pues no se sabe si alguien más lo haría.

Lo anterior es problemático por dos razones: por un lado, contribuye a percibir a los explotadores como benefactores y, por otro, el trabajo en calle se normaliza en tanto que un mono de colores con el logotipo de la empresa le otorga una legitimidad y una formalidad aparente, obscureciendo la superexplotación subyacente. Es importante señalar que esta superexplotación no solo se limita al ámbito económico, pues, como vimos al interior del programa del DIF Municipal, el grupo de pintores recibía bajos salarios, carecía de prestaciones como seguro social y su trabajo era intensificado al no contratar trabajadores formales. La superexplotación de estos muchachos a manos de los funcionarios del programa se hallaba justificada en que eran sujetos de asistencia social, por lo que el programa no les estaba ofreciendo un empleo, sino únicamente un apoyo. De esta manera, si bien los funcionarios del DIF Municipal no acumulaban capital en el sentido económico a partir del trabajo de los pintores, este generaba otro tipo de poder que les permitía legitimar y justificar sus prácticas asistencialistas y regulatorias.

Ahora bien, la superexplotación de los trabajadores provoca la disminución relativa o absoluta del capital variable (es decir, de la fuerza de trabajo empleada), lo que deriva en la expansión del ejército industrial de reserva (Marini 1973:96). En este sentido, los programas del DIF Municipal y JUCONI, más que alejar a los menores de dicho ejército, los preparan para funcionar exitosamente dentro del mismo. En ambas organizaciones, esto se llevaba a cabo mediante dos tipos de prácticas: aquellas que estaban orientadas a disciplinar a los menores y las que fomentaban la “descallejización” de los mismos. Con respecto a las primeras, en ambos programas se les enseñaba a los menores a respetar y ocupar su lugar en la jerarquía de autoridad, lo cual fue particularmente explícito en el DIF Municipal mediante la práctica de descontarles la beca a los beneficiarios que se desviaban de los lineamientos establecidos por el personal. En este sentido, al igual que las mujeres migrantes de origen campesino en Baja California estudiadas por Martínez Novo (2006), los menores se preparan para conformar una fuerza de trabajo “empleable” y disciplinada (Martínez Novo 2006:127).

Con respecto a las acciones dirigidas a “descallejizar” a los menores, en el caso del DIF Municipal, estas fueron evidentes en la obra de teatro, en donde los niños representaban a monstruos que querían dejar de serlo, es decir, que deseaban “desmonstruarse”, una metáfora para dejar atrás su vida o trabajo en las calles. En JUCONI encontramos algo muy similar en el “cambio intensivo”, etapa en la que, en palabras de una educadora, el menor “vomita todo lo que le ha pasado” para empezar a crear un estómago emocional que les permita digerir las cosas de una manera madura. El problema con esto es que, este estómago fomenta la “resiliencia” del menor, haciéndolo ver como un sobreviviente de las adversidades que experimentó al vivir o trabajar en las calles.

Como mencionamos en el capítulo uno, el término “resiliencia” ha sido criticado por Herrera Bautista (s/f) ya que, al ser un concepto que originalmente designaba la elasticidad, fuerza y resistencia de algunos materiales, al aplicarse a grupos humanos, este confiere la idea de que existe una capacidad intrínseca al individuo para resistir situaciones extremas sin sufrir daños de consideración (Herrera Bautista s/f). En este sentido, Panter-Brick (2002:163) propone que la noción de resiliencia podría verse como un reflejo de la agencia de un individuo, pero, de acuerdo con Herrera Bautista, esto implicaría que la elasticidad de estas personas les permitirá soportar las adversidades y recobrase de las mismas por sí solas (Herrera Bautista s/f) sin tomar en cuenta, por un lado, las variables estructurales que contribuyen a producir dichas adversidades y, por otro, las acciones orientadas a ayudar a las personas que las experimentan. Con respecto a esto último, el DIF Municipal y JUCONI manejan la resiliencia de los menores que viven o trabajan en las calles de dos formas complementarias entre sí. Por un lado, estos menores no son considerados como resilientes; por el contrario, los programas de ambas organizaciones los construyen como seres que han sido dañados por su vida en calle, al punto de que en JUCONI la atención a los “traumas” derivados de esta vida es uno de los componentes clave de sus programas. Por otro lado, y como consecuencia — si bien tal vez no intencionada— de lo anterior, ambos programas buscan, como

mencionamos líneas arriba, convertirlos en sujetos resilientes mediante las prácticas orientadas a “descallejizarlos”, las cuales les enseñan a entender su pobreza como algo natural, como una situación que les tocó vivir y que deben aprender a asimilar.

A pesar de que los menores son entrenados para constituir una fuerza de trabajo disciplinada, los programas del DIF y JUCONI han oscurecido los vínculos con el capital de manera que no reconocen que, como mencionamos en el capítulo uno, en el sistema capitalista se espera que los niños pobres sean objetos de producción y sujetos de reproducción social al mismo tiempo, lo cual, como menciona Martínez Novo (2006:109), es imposible dado que el sistema capitalista en un país como México no provee a los niños pobres con las condiciones (comida, bienestar económico y psicológico, tiempo) ni los recursos (escuelas, materiales pedagógicos) necesarios para ser objetos de la reproducción social.

Es importante señalar que, como hemos visto, no es que en ninguno de los programas se ignorara por completo el papel de las variables estructurales (como la precaria economía de las familias de estos menores) en la generación de la población que atendían. De hecho, el director operativo de JUCONI reconocía ampliamente que sus beneficiarios eran síntomas de una de las fases del capitalismo en la que nos encontramos actualmente. Entonces, ¿cómo podemos explicar que, a pesar de que algunos miembros del personal de ambas organizaciones pensaban que el origen de estos menores iba más allá de lo que “atacaban” por medio de sus programas, sus prácticas seguían orientándose a “poner parches” mediante acciones individualizadas?. De acuerdo con la lectura que Kate Crehan hace de Gramsci, esta discrepancia entre los discursos y las prácticas, es lo que el autor llama el “contraste entre el pensar y el actuar, es decir, la coexistencia de dos concepciones del mundo, una afirmada con palabras, la otra puesta de manifiesto en la manera efectiva de actuar” (citado en Crehan 2004:214). Esta conciencia, continúa Gramsci, no es simplemente un producto del “auto-engaño” y, aun si lo fuera, esto únicamente sería aceptable para algunos individuos tomados aisladamente. Sin embargo, cuando el contraste aparece en las

manifestaciones de la vida de las grandes masas, entonces ese contraste entre pensamiento y acción es la expresión de contrastes más profundos de orden histórico social (citado en Crehan 2004: 215) que, al parecer de Crehan, son contradicciones de clase.

De esta manera, las contradicciones de clase serían la explicación de la diferencia entre los discursos y las prácticas en los programas del DIF Municipal y JUCONI. En efecto, en tanto que estos buscan reintegrar a sus beneficiarios a “la sociedad” como un todo homogéneo que se caracteriza por valores de clase media y católicos, no reconocen que la sociedad está integrada por distintas clases sociales, generadas a partir de la estructura de producción del sistema capitalista. Debido a esto, al ignorar que el problema de fondo es un sistema de organización y producción que depende de un ejército industrial de reserva para sobrevivir y reproducirse —del cual forman parte los menores y sus familias—, los programas no pueden siquiera plantearse modificar la estructura de clases, ni, en palabras de Martínez Novo, imaginarse una sociedad igualitaria (Martínez Novo 2006:131).

Por esta razón, podemos afirmar que tanto JUCONI como el DIF son exitosos en términos de despolitizar y naturalizar el problema de los menores que trabajan o viven en las calles, lo que hace eco de la “*antipolitics machine*” que encontró Ferguson en Lesotho (Ferguson 1994:256). En el caso de JUCONI esto reviste de una especial importancia pues, a todas luces, es considerada —a nivel nacional e internacional— como una organización exitosa en el trabajo con menores que viven o trabajan en las calles. Sin embargo, Martínez Novo propone que las personas que tienen el acceso al conocimiento y a los recursos para crear organizaciones no-gubernamentales en sociedades no occidentales a menudo son miembros de las clases medias y altas, y que estos trabajadores no pueden ubicarse fuera de las historias particulares y los campos de fuerza de sus propias sociedades (Martínez Novo 2006:151).

Así, nos parece acertado el argumento de Jackman, quien señala que las clases medias y altas utilizan la caridad para ponerse en contacto con los pobres y no blancos,

para enseñarles que los privilegiados son buenos y se preocupan por ellos y para tratar de moldear la imagen de los subalternos que los privilegiados tienen de ellos (Jackman citada en Martínez Novo 2006:143-144). En nuestro caso, es importante señalar que JUCONI no sólo moldea la imagen de sus beneficiarios, sino también la del público en general, y contribuye en Puebla (y, más generalmente en México) a promover un acercamiento a los menores en situación de calle distinto al de “vida desnuda” (Agamben 1998), que se vive Brasil y Colombia, donde los escuadrones de la muerte y los paramilitares asesinan a estos menores como parte de una limpieza social.

En este sentido, si bien en México aún no existe una conciencia social orientada al exterminio de estos menores como parte de una limpieza social, esta noción ya está presente en el discurso oficial del gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa mediante la campaña “Limpiemos México”, dada a conocer a principios de julio del 2007. Esta campaña forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y consta de tres ejes: el Programa de Rescate de Espacios Públicos, el Programa Escuela Segura y el Programa Nacional Contra las Adicciones. El primero busca “mejorar o construir si es necesario parques, plazas y jardines, así como espacios recreativos y culturales” para que “estos espacios sean ocupados por las familias y los vecinos y no por la delincuencia, así limpiaremos nuestras comunidades contra la inseguridad” (Presidencia de la República 2007). Hasta ahora, el segundo eje ha suscitado el mayor número de reacciones críticas debido a que medidas como realizar pruebas “anti-doping” a los alumnos o revisar sus mochilas en busca de drogas o armas se perciben como un ataque contra “la integridad física y moral de la persona” (Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos 2007).

La noción de limpieza se encuentra extendida por todo el documento:

Limpiémoslo [a México] de criminalidad, limpiémoslo de corrupción, limpiémoslo de droga, limpiémoslo de comportamientos deshonestos (...) el objetivo es limpiar nuestras calles de la delincuencia mediante la acción decidida de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno y al mismo tiempo establecer medidas para recuperar nuestras escuelas, nuestros espacios públicos y asegurar que nuestras niñas y niños, nuestros jóvenes, no sean víctimas de las garras de las drogas (Presidencia de la República 2007).

El uso del término “limpieza” refleja la criminalidad de un gobierno que, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, ha optado por poner en marcha “operativos conjuntos para restablecer el poder coercitivo del Estado, el poder de mando y de fuerza pública del Gobierno en aquellas regiones más golpeadas por el narcotráfico y el crimen organizado” (Presidencia de la República 2007). Por otra parte, el empleo de ese término es irresponsable tanto por su importación acrítica del contexto colombiano en donde existen mecanismos de limpieza social orientados a exterminar a los “delincuentes”, (entre los cuales se encuentran los menores que viven en los espacios públicos) (Taussig 2003) como porque, como muestra este trabajo, carece del respaldo de la sociedad mexicana.

Los esfuerzos de la Fundación JUCONI y el DIF Municipal están orientados a crear una conciencia en la sociedad de que estos menores no son monstruosos ni anormales (si fueran contruidos como tales sería más fácil exterminarlos), por lo que deben ser “reintegrados a la sociedad”. En efecto, JUCONI (y en menor medida el DIF) contribuye a que la pobreza sea “soportable” para la sociedad en general, por lo que ver a un niño en la calle no nos parece intolerable ni nos provoca deseos de asesinarlo para mantener “limpia” la ciudad. Por el contrario, lo que nos provocan estos menores es el deseo de ayudarlos, lo cual es un sentimiento que proviene de la colonia, época en donde el indio se construía como un menor que debería ser representado por un abogado no indio, y como un ser infantil, pasivo, no racional y “adorable”, protegido de los colonos explotadores por la Iglesia y la Corona (Martínez Novo 2006:41). La manera en que ayudamos a estos menores es participando altruista y caritativamente en campañas de recaudación de fondos para organizaciones como JUCONI, como aquella titulada “tu cambio por mi cambio”, con lo que aseguran que el que tiene que cambiar es el menor, no la situación económica y política del país, lo cual es calificado por Lipovetsky como “altruismo indoloro” en donde ser solidario produce una satisfacción personal sin implicar ningún tipo de obligación, sacrificio ni responsabilidad personal. Basta con que

la sociedad civil asista a los espectáculos que les ofrecen a cambio de nada, en donde no se es solidario sino que solamente se consume la solidaridad (Lipovsky 1994:133).

En este sentido, vale la pena retomar el espectáculo en el que participaban los automovilistas y el grupo de Éxodo en el cruce del Boulevard Cinco de Mayo esquina con Sánchez Pontón con el que abrimos esta investigación. La apropiación de este grupo de adolescentes clasemedios de los elementos distintivos del trabajo en calle (en donde llevar ropa “artificialmente” rasgada equivalía a recibir más dinero porque despertaba la compasión y el sentimiento altruista de los automovilistas), y la reacción favorable de estos últimos al entender su papel en esta representación, validándola mediante su participación en la misma, refleja hasta qué punto se ha naturalizado y despolitizado la condición de quienes trabajan en calle, percibiéndose más como receptores legítimos de asistencia social o sujetos de inversión que como miembros de un ejército industrial de reserva cuya desechabilidad busca contenerse pero no cuestionarse ni eliminarse de raíz. Las estrategias de organizaciones como el DIF Municipal y JUCONI aseguran que los menores que viven o trabajan en la calle asimilen su pobreza como una cuestión individual y busquen superarla en tanto individuos, enfrentándolos en términos igualmente individuales con sus “benefactores”, cuya decisión de participar en las acciones que proponen las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en beneficio de estos menores se percibe como una cuestión personal y moral. De esta manera, se entorpecen las posibilidades de pensar y actuar colectivamente sobre una de las manifestaciones más visibles de los efectos perniciosos de las políticas neoliberales.

Para terminar, es importante mencionar que el propósito de este trabajo no ha sido evaluar los programas del DIF Municipal y la Fundación JUCONI en términos de cuál de ellos provee los mejores servicios a los menores que trabajan y/o viven en las calles de Puebla. Tampoco es un trabajo “propositivo”, en el sentido de que no apunta hacia posibles soluciones a este problema. Por el contrario, esta investigación ha buscado

mostrar la complejidad y las contradicciones de los discursos y las prácticas de las acciones que se generan en el ámbito gubernamental y el Tercer Sector para regular y prestar servicios a estos menores. Esto adquiere particular importancia dentro del Tercer Sector, pues las ONGs u OSCs, como mencionamos, a menudo aparecen rodeadas de un aura de bondad que dificulta cuestionar y problematizar empíricamente sus alcances y objetivos.

Uno de los elementos que complica este panorama es la conciencia contradictoria, evidente en la contradicción de reintegrar a los menores en “la sociedad”, sin pensar en que esto requiere que estos adquieran movilidad social, lo que implica replantearse la jerarquía de clases de la sociedad capitalista mexicana. Como hemos visto, esta conciencia contradictoria también es evidente en las empresas cuyos productos son comercializados por quienes trabajan en las calles, como el caso de TELCEL y la personificación del capital en Carlos Slim. A partir de esto, si la conciencia contradictoria está presente en el Tercer Sector, el gobierno y las empresas, cabe preguntarnos si esta también puede encontrarse en la academia. En este sentido, los antropólogos no debemos estar exentos de examinar nuestra conciencia y considerar las contradicciones que encierran nuestras decisiones y nuestro trabajo, las cuales, al igual que en los casos de las organizaciones examinadas y empresas como TELCEL, son contradicciones de clase.

Si bien cada uno ejerce su albedrío al momento de elegir las causas en las cuales desea involucrarse, así como desde qué ámbito, este trabajo muestra que las buenas intenciones no pueden ser el impulso que guíe nuestras acciones. En efecto, los discursos y las prácticas del DIF Municipal y JUCONI se construyen a partir de la intención de ayudar a los menores que trabajan y/o viven en las calles de la ciudad de Puebla. De igual manera, gran parte del personal de ambas organizaciones desempeñaba su trabajo movido por un sentimiento de caridad y altruismo. Sin embargo, como hemos visto, además de la conciencia contradictoria, la situación de los menores y sus familias aquí presentada no puede superarse sin reflexionar críticamente

sobre la naturaleza política y económica de las variables mediante las cuales están integrados estos menores a la sociedad. Por esta razón, una antropología crítica no debe dejarse seducir por las soluciones inmediatas, remediales y acríicas a los problemas que enfrentamos hoy en día, sino orientar sus esfuerzos hacia un cuestionamiento y una documentación seria y responsable de los procesos radicales que generan a las grandes masas de población que el capitalismo ha vuelto redundantes. Esta no debe ser sólo la documentación del fracaso, sino el análisis fehaciente de la lucha de clases como motor del cambio y realización, en la cual siempre hemos tomado una posición de antemano. Es nuestra obligación, como grupo privilegiado por la educación y la libertad de ejercer la ética, elegir ese lado con una conciencia de clase para sí asumiendo todas las consecuencias de nuestra elección. La antropología es una disciplina eminentemente política y es la mejor armada para confrontar al estado y al capital con los datos derivados de la experiencia cotidiana de las mayorías y poder dar cuenta de ellas en sus múltiples y estructuradas contradicciones.